

Participación política de las mujeres en Ecuador: experiencias inclusivas

Dra. Roxana Silva Ch.
Consejera Nacional Electoral, Ecuador

Las mujeres alrededor del mundo, han librado una dura lucha para asegurar que su voz sea escuchada y sus intereses sean representados en la esfera pública, traducándose inmediatamente en innumerables esfuerzos por lograr una participación política equitativa y efectiva. América Latina, no ha sido ajena a esta realidad, siendo una región emergente en la que las mujeres han tomado roles protagónicos como figuras públicas y convirtiéndose rápidamente en un referente mundial en cuanto a la participación política de las mujeres. Sin embargo, en países como el mío, Ecuador, y los demás en América Latina, falta un largo camino por recorrer para llegar a la ansiada participación equitativa e igualitaria, tanto en aspectos de la vida cotidiana, como en aspectos públicos, de los cuales la política es un eje fundamental. La región latinoamericana se encuentra en un constante desarrollo, basado en la adopción de modelos propios, basado en las vivencias y experiencias históricas de cada país, lo que ha llevado a la redefinición de las estructuras sociales; no obstante, la desigualdad en diversos ámbitos, lamentablemente, persiste. La realidad de las mujeres ante estas dinámicas locales se ha visto afectada, llegando incluso a verse reflejada en una situación de injusticia social. Por un lado está la injusticia socioeconómica, que incluye la privación de bienes materiales para una vida digna, y la segunda es la injusticia cultural o simbólica, que incluye la dominación cultural, el no reconocimiento y el irrespeto a las mujeres latinoamericanas (Fraser 1997).

Es por esto, que en América Latina, los diversos colectivos de mujeres se han enfocado en exigir igualdad en las condiciones de vida, tanto públicas como privadas, para todas las personas, sólo por el hecho de serlo. Es por esto, y de acuerdo con afirmado por Elizabeth Stanton en el siglo XIX, «existen ciertos derechos naturales tan inalienables para la civilización como el derecho al aire... Los derechos naturales de un hombre y una mujer civilizados con el [derecho] al gobierno, a la propiedad, al desarrollo armonioso de todos sus poderes y a la gratificación de sus deseos... Los sexos son iguales y por lo tanto merecen derechos iguales» (Stanton 1898). Las mujeres latinoamericanas hemos fundando nuestra lucha social en la reivindicación de la igualdad de derechos, pero también en la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, y desde todos los países de la región, se ha impulsado el discurso de la igualdad en todas las esferas sociales y de intervención de las y los ciudadanos. La igualdad se verá reflejada en el mismo acceso a las mismas oportunidades para todas y todos los ciudadanos, sin razón de género, etnia, religión, entre otros aspectos socioculturales que nos distinguen a unos de otros. Pero esta igualdad se ve debatida, el momento en que debiera tener en cuenta que debe existir una igualdad de partida, es decir, que las condiciones iniciales específicas de cada quien son diferentes (León y Holguín 2005).

Ante una realidad mucho más compleja de lo que las teorías y conceptos de igualdad podrían reflejar, y debido a que en América Latina las mujeres hemos logrado ocupar cargos y cada vez tenemos una mayor presencia en la esfera pública, a pesar de las adversidades y condiciones desfavorables, se ha apostado por promover políticas y acciones inclusivas. Estas acciones tienen como objetivo claro y central, brindar oportunidades así como promover la participación equitativa de todos los grupos y sectores de una sociedad. En el Ecuador en particular, se ha fomentado como política pública transversal y eje de acción fundamental, la inclusión social, económica, cultural, educativa y política de sectores que han sido tradicionalmente marginados del accionar estatal, como son las y los adolescentes, adultos mayores, las personas con discapacidad, las y los indígenas, afrodescendientes, las personas en situación de riesgo, como

son aquellas que están privadas de su libertad por ejemplo, grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transgénero (GLBT), y las mujeres. Pero en otros países de la región, también se impulsan distintas iniciativas por incluir a estos sectores y volverlos componentes activos de cada una de sus sociedades. Por lo que puedo indicar que desde Latinoamérica nos estamos volcando hacia la inclusión.

La inclusión es sin duda un término amplio que se aplica a todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas, sin embargo, la inclusión en los procesos de participación política se ha vuelto un eje fundamental de la lucha por el ejercicio pleno y democrático de los derechos de las mujeres, así como de los demás grupos que hoy en día son llamados como grupos de atención prioritaria. Exigir oportunidades para participar, opinar y decidir en igualdad de condiciones sobre el futuro político de cada uno de nuestros países se ha vuelto un imperativo en el discurso de los colectivos de mujeres, presentando alternativas y opciones para lograr este cometido. En la actualidad, la visibilización de otras y otros actores sociales que exigen equidad de derechos y de participación, ha reforzado las reivindicaciones que los colectivos de mujeres han impulsado desde finales del siglo xx en América Latina. Ante esto, los países han reaccionado de diferentes formas, siendo un claro ejemplo, la implementación de leyes y sistemas de cuotas para la representación, tanto de mujeres como de distintas minorías. Sin embargo, indicar qué país es más o menos inclusivo es complejo, pero ciertamente podemos analizar qué grupos tienen el derecho a participar en política. Pero con respecto a la situación política de las mujeres y su participación, lo que podemos evidenciar, es que el grado de inclusividad de un régimen aumenta cuando ellas obtienen el derecho a sufragar y a ser elegidas, y hacen uso de él, no sólo eligiendo sino también haciéndose elegir. Es decir cuando sufragan y logran ingresar a las élites políticas, y hacen presencia en cargos públicos tanto de designación como de elección. (Wills 2004).

La inclusión política en los países latinoamericanos se ve entonces reflejada en distintos ámbitos de la vida política de cada uno de los países, mediante los siguientes factores: el número de electoras que tienen la posibilidad de sufragar; el número de mujeres que en efecto ejercieron su derecho al sufragio; el número de mujeres que se presentaron como candidatas; el número de mujeres que resultaron electas como autoridades; y, el número de mujeres que son designadas para cargos públicos de alto rango, como ministras, secretarías de estado, juezas, intendentas, entre otras designaciones. Pero desde Ecuador, hemos incluido una variable importante entre estos factores que nos ayudarán a determinar cuán inclusivo es un determinado país o en la práctica, su gobierno; esto es el número de mujeres que efectivamente participan en los espacios de toma de decisiones dentro de una organización política. Sumando todos y cada uno de estos aspectos, podemos apreciar una radiografía bastante acertada de la participación política real de las mujeres en cada uno de los países de América Latina, y del mundo también.

Breve análisis del camino hacia la participación política de las mujeres en América Latina

Desde América Latina, hemos sentado precedentes en cuanto a la participación activa de la mujer en la esfera política. Pero esto no ha sido fácil o natural, esta participación activa en los asuntos públicos se ha dado como consecuencia positiva de una ardua lucha por exigir la participación justa y equitativa de las mujeres en los espacios de poder, así como de toma de decisiones de nuestros países. Mirando hacia atrás, hacia la historia reciente de nuestra región, tenemos que en 1974 la primera mujer que llegó a la presidencia de su país, fue María Estela Martínez de Perón en Argentina. Isabelita, como era conocida, asumió la presidencia el 1 de julio de 1974, tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, de quien era su vicepresidenta. Dos años más tarde, en marzo de 1976, fue depuesta por un golpe de Estado. Años después, en 1990 en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, Violeta Chamorro fue la primera presidenta electa mediante votación popular. Subsecuentemente, la segunda mujer electa como presidenta

de su país en 1999, también fue una latinoamericana, la panameña Mireya Moscoso. También tenemos a Laura Chinchilla, elegida en el 2010 como presidenta, siendo la primera mujer en gobernar Costa Rica, y a Michelle Bachelet, quien fue electa como presidenta de Chile en el 2006 y reelecta en el 2014.

Las mujeres latinoamericanas hemos ganado espacios para potenciar nuestra participación política, sin duda, pero también hemos sido perjudicadas por los sistemas políticos patriarcales que hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Esto ha llevado a que varias mujeres que hayan visto, y hasta el día de hoy, vean mermada su participación política y afectados sus derechos. Lidia Gueiler Tejada, accedió en 1979 a la presidencia de Bolivia desde la presidencia de la Cámara de Diputados en y ocho meses después sufrió un golpe de Estado y fue obligada al exilio. De la misma forma, Rosalía Arteaga gobernó Ecuador por 48 horas en febrero de 1997, tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram de quien era vicepresidenta. En este caso, las estructuras políticas presentaron el machismo sistemático, permitiendo que sea nombrada jefa de Estado "temporal", principalmente por el hecho de ser mujer. El entonces presidente del Congreso, Fabián Alarcón Rivera, asumió como presidente interino hasta que se celebraron nuevas elecciones en 1998.

Hoy en día, y con la posesión por segunda vez de Michelle Bachelet como presidente de Chile, en América Latina y el Caribe contamos con seis mujeres gobernantes: Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica, Michelle Bachelet en Chile, Portia Simpson en Jamaica, y Kamla Persad-Bissessar en y Trinidad y Tobago. Un dato curioso con respecto a este tema, es que Europa actualmente cuenta con la misma cantidad de mujeres en el poder, seis jefas de estado o de gobierno en Alemania, Lituania, Dinamarca, Eslovenia, Kosovo y San Marino. Mientras que en África hay cuatro mujeres gobernantes en Liberia, Malawi, República Centroafricana y Senegal, y en Asia son tres, en Bangladesh, Corea del Sur y Tailandia. Volviendo a América Latina, a pesar de tener un número considerable de mujeres como presidentas o jefas de estado, nuestra presencia en otros espacios de toma de decisiones en la esfera pública, todavía es escasa. Diversos estudios de organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan una realidad latinoamericana, en la cual se refleja una participación bastante baja de las mujeres. En el continente las mujeres parlamentarias, juezas o ministras ocupan apenas un 26% de los cargos; mientras que a nivel de los gobiernos locales la situación es todavía más precaria con un 11,7% de mujeres alcaldesas.

No obstante, nuevamente se evidencia que en América Latina llevamos la posta para brindar oportunidades de participación a las mujeres. Actualmente 13 países latinoamericanos tienen leyes de cuotas para que las mujeres participen activamente en política. Sin embargo, existen países en lo que se evidencian bajísima participación de las mujeres, como son Cuba y Nicaragua. Varias explicaciones pueden darse a este tema, sin embargo la piedra angular de la falta de participación femenina, es el trasfondo cultural, las tradiciones y costumbres de cada sociedad. Las sociedades latinoamericanas tienen un tinte patriarcal, el cual define su estructura e invisibiliza, en la mayoría de los casos, los derechos de las mujeres. Sin embargo, debemos reconocer que con similar magnitud, factores socioeconómicos como la pobreza, educación, ubicación geográfica, entre otros; también afectan la posibilidad de que las mujeres se involucren en temas públicos, pues en muchos casos, están absortas en solucionar sus problemas personales, inmediatos y locales.

Las diferencias entre hombres y mujeres en América Latina se evidencian en diversos ámbitos, yendo desde la representación política hasta la arena económica. Y es precisamente en el terreno económico, donde ninguno de los países ha enfatizado en propulsar una mejor distribución entre hombres y mujeres. Cinco de cada diez mujeres están excluidas del mercado de trabajo en América Latina y el

desempleo promedio de la región es de 7,8% en el caso de las mujeres contra el 5,9% en el caso de los hombres. Esto, se ve reflejado en la realidad diaria que reduce las oportunidades de emprender de las mujeres, así como tampoco contribuyen con su autonomía económica, la cual es una precondition básica para el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanas.

Las cifras antes revisadas evidencian que a pesar de tener un número razonable de mujeres frente a los gobiernos latinoamericanos, en la región no hay una estrategia generalizada para potenciar la participación política de las mujeres; es decir, el caso de las presidentas se pueden presentar como casos aislados de liderazgo político, mas no como evidencia de un cambio en las estructuras políticas. Es por esto, que tenemos todavía pendiente el posicionamiento de la equidad de género como un eje transversal, entendiéndolo como el trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades (IFAD 2012). Pero no solamente con miras a una mayor participación política, pero también con el objetivo de buscar reivindicaciones para las latinoamericanas, puesto que para lograr la equidad de género, generalmente se requiere la adopción de medidas específicas para compensar las desventajas históricas y sociales que arrastramos nosotras, las mujeres.

Contexto para la participación política de la mujer en el Ecuador

En el Ecuador, desde la aprobación de la Constitución del 2008, se han establecido nuevos lineamientos, tanto de acción como de ejecución de las instituciones estatales. Dentro de estas nuevas directrices para la política pública nacional, está principalmente la inclusión como valor fundamental de la nueva institucionalidad ecuatoriana. Es por esto, que la inclusión no puede limitarse a lineamientos en el papel, sino llevarla a la práctica, brindar oportunidades y garantizar la participación equitativa de todos aquellos grupos o sectores sociales que han sido tradicionalmente relegados a la esfera privada, sin posibilidad de acción o decisión en la pública. Esta inclusión entonces, también se extiende a la arena política, la cual no sólo se refiere a la participación a través del voto y de la postulación de todas y todos; sino también el derecho a estar presentes en igualdad de condiciones en los cargos de elección. En este sentido, la igualdad política también depende de si todos los grupos sociales del país están representados adecuadamente en el gobierno (Htun 2005).

Es por esto, que en el Ecuador, a partir del marco normativo y legal vigente, se ha impulsado la inclusión a partir de políticas públicas y acciones afirmativas, generando oportunidades inéditas en la sociedad. En este sentido, las oportunidades, en efecto, se han extendido a la participación políticas de las y los ecuatorianos. Partiendo de la Constitución de la República, la cual en su artículo 61 numeral 7, establece que las ecuatorianas y los ecuatorianos tienen el derecho de desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional; podemos aseverar que se ha impulsado la participación política de las mujeres ecuatorianas, al menos desde las normas. De la misma forma, en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, o más conocida como Código de la Democracia, se obliga que tanto las listas de candidaturas, como las directivas de las organizaciones políticas, sean paritarias y alternadas. Recogiendo lo establecido por Marta Lamas con respecto a la paridad, esta quiere decir estrictamente la mitad de mujeres y la mitad hombres (Lamas s/f). No obstante, la paridad va más allá de únicamente números, la paridad expresa un principio de igualdad, de no discriminación y de democratización (Arboleda 2009).

No obstante, en el país todavía adolecemos de un sistema electoral con diversas falencias, que repercuten negativamente en la representación paritaria de las mujeres en la práctica. El sistema electoral ecuatoriano se basa en la norma universal de un elector o electoral es igual a un voto, partiendo de un principio de igualdad y equidad del voto de todas y todos los ciudadanos. Así mismo, la forma de votación es entre listas. Es decir, las y los ciudadanos pueden votar por las y los candidatos de su preferencia entre distintas listas u organizaciones políticas. También pueden votar por una sola lista o en “plancha”, que es lo que en Ecuador entendemos como el apoyo a todos y cada uno de los y las candidatas de una sola lista. Esta forma de votación, aporta a una distribución más personalizada del voto antes que reforzar el voto por una organización política. Sin embargo, en el Ecuador, más del 70% del electorado vota por todos los candidatos de una sola lista. Mientras que en lo que corresponde a la presentación de listas, en el país tenemos un sistema de listas abiertas o más conocido como sistema de listas libres, en las que de acuerdo a la votación ciudadana, la lista puede reordenarse. Por ejemplo, un candidato en el tercer puesto, puede ganar el segundo curul si recibe una votación mayor a la candidata que ocupa este puesto, lo que claramente perjudicaría la elección de esta candidata. Sin embargo, según la Ley como lo mencioné anteriormente, las listas de candidaturas deben ser alternadas, es decir ser presentadas a través del conocido sistema de cremallera, así como paritariamente compuestas por el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Sin embargo, esto no puede garantizar que tanto hombres como mujeres lleguen a ser autoridades paritariamente; pues en la gran mayoría de los casos, son hombres quienes encabezan las listas y quienes tienen mayores probabilidades de acceder a un escaño.

Otro factor que incide en la representación de las mujeres, es el método de asignación de escaños que se utiliza para todas las elecciones pluripersonales en el Ecuador, con excepción de las y los asambleístas nacionales, es decir, para asambleístas provinciales, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales y parlamentarios andinos. En el país, los métodos de asignación de escaños que se aplican, son métodos proporcionales. No obstante, el que rige actualmente la distribución de escaños antes mencionada, es aquel basado en la fórmula de Divisores Continuos, o mejor conocido como Método D'Hondt; el cual es ampliamente conocido por su característica concentradora. De igual manera, otro factor que repercute en la participación y el acceso de la mujer a espacios de representación, es la creación de circunscripciones electorales. Con la finalidad de acercar a las y los electores a sus autoridades y viceversa, en el Ecuador desde las elecciones de 2013 se han aplicado circunscripciones electorales. Al delimitar dichas circunscripciones, se ha buscado, de ser posible que se cumpla con los siguientes parámetros internacionales: mantener, en lo posible, la unidad cantonal, salvo en los casos en que el asentamiento urbano pueda constituirse, por sí mismo, en un distrito; tener continuidad territorial; y determinar los rangos entre distritos urbanos y rurales, conservando en lo posible, estas cualidades de continuidad geográfica, ecológica, étnica y sectorial. La creación de circunscripciones pequeñas junto con la fórmula de divisores continuos en el país, sin duda, ha dificultado la participación política de las mujeres; pues se favorece a las organizaciones políticas mayoritarias, pero también reduce la representación de grupos minoritarios, dentro de los que podrían estar las mujeres.

Participación política de la mujer en el Ecuador: experiencias inclusivas en la Función Electoral

En Ecuador, como ya se señaló anteriormente, la Constitución marca un hito dentro de la protección a los grupos de atención prioritaria, pues convierte las políticas de inclusión en un eje transversal de la actuación de todas las funciones del Estado. En mi caso, y como Consejera Nacional Electoral, he contribuido en la concreción de acciones afirmativas en la arena electoral. El Consejo Nacional Electoral creó la Comisión de Inclusión el 1 de noviembre de 2012, con el objetivo de generar insumos que permitan al Consejo adoptar las medidas necesarias en aras a garantizar la incorporación en igualdad de derechos a sectores tradicionalmente discriminados, y también con enfoque de género. Sin

embargo a pesar de la normativa vigente en el país que obliga listas paritarias y alternadas, así como diversas iniciativas que impulsan la participación política de la mujer; dicha participación efectiva todavía deja mucho que desear, especialmente a nivel local, donde está bastante minimizada. Esta participación se ve tanto desde el lado de las electoras, como de aquellas mujeres que participan en la competencia política y resultan elegidas.

El sufragio en Ecuador, es un acto considerado como obligatorio; pues las personas reciben un certificado que valida todo trámite público o privado; por lo que esto dificulta medir con mayor veracidad la participación democrática tomando únicamente a la asistencia a las urnas el día de las elecciones como indicador. Con esto en mente, asevero que la votación de las ecuatorianas en los últimos 7 años no ha presentado mayor variación, mostrando un número superior de mujeres que acuden a votar en relación con los hombres. Sin embargo, esto está directamente relacionado con la cantidad de mujeres, que a su vez, también es superior a la de los hombres en el país. Pero una cifra importante e interesante, es que el número de mujeres que no acuden a votar ha ido disminuyendo conforme avanzan los procesos electorales; lo que sugiere un aumento de participación activa de las ecuatorianas como electoras. A pesar de que en el 2013 parecería haber un incremento, hay que tomar en cuenta que en ese año se incluyeron a los sectores con voto facultativo, como son las y los adolescentes, las personas con discapacidad y las y los adultos mayores, lo que incrementó el padrón y refleja un mayor ausentismo. Por el contrario, los hombres que no acuden a votar se mantienen en una cifra relativamente estable, y en el 2013 sucede lo mismo que en el caso de las mujeres.

Tabla I
Evolución de la votación de las mujeres en el Ecuador: 2006 – 2013

2006	2009	2011	2013
TOTAL DE ELECTORES			
9,165,125	10,532,234	11,158,419	11,675,441
ELECTORAS			
4,623,363	5,275,287	5,588,507	5,848,128
TOTAL DE SUFRAGANTES			
6,617,242	7,928,748	8,634,376	8,602,603
SUFRAGANTES			
3,399,417	4,052,845	4,400,902	4,373,871
NO SUFRAGAN			
1,223,946	1,222,442	1,187,605	1,474,257

Fuente: Consejo Nacional Electoral, 2013

Tabla II
Evolución de la votación de los hombres en el Ecuador: 2006 – 2013

2006	2009	2011	2013
TOTAL DE ELECTORES			
9,165,125	10,532,234	11,158,419	11,675,441
ELECTORES			
4,541,762	5,256,947	5,569,912	5,827,313
TOTAL DE SUFRAGANTES			

6,617,242	7,928,748	8,634,376	8,602,603
SUFRAGANTES			
3,217,825	3,875,903	4,233,474	4,228,732
NO SUFRAGAN			
1,323,937	1,381,044	1,336,438	1,598,581

Fuente: Consejo Nacional Electoral, 2013

Mientras que analizando la participación política de las mujeres como autoridades electas, provenientes de un proceso de sufragio popular; en Ecuador existen dos escenarios totalmente diferentes: la Asamblea Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La participación política de la mujer en el espectro legislativo ha tenido una tendencia creciente en los últimos 15 años; sin embargo aún queda camino por recorrer para alcanzar la paridad real en la representación.

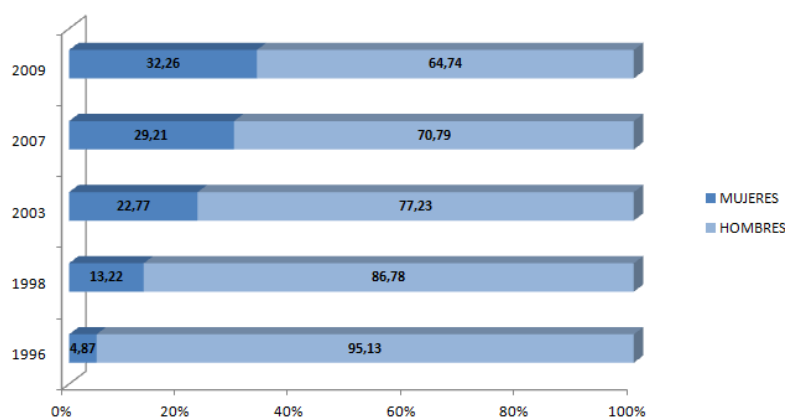
Es importante traer a la memoria, que desde inicios del siglo XXI, se da un salto cuantitativo de más de 10 puntos porcentuales en la representación de las mujeres ecuatorianas en el Congreso o la actual Asamblea, lo que representa un gran avance para la representación política de la mujer. No obstante, esto está directamente relacionado con la aprobación de la Ley de Cuotas aprobada en el año 2000. Esta ley establecía un cupo mínimo de mujeres en las listas de candidaturas presentadas por las organizaciones políticas, así como exigía la ubicación alternada y secuencial de las y los candidatos en esta lista. Con la aprobación de esta Ley, se partió en el 2000 con una cuota del 30% de mujeres que deben conformar una lista, valor que incrementaría el 5% en cada proceso electoral. En el año 2008, con la aprobación del nuevo cuerpo constitucional, se estableció la paridad como norma en la presentación de candidaturas, llegando a una cuota del 50% para las mujeres y 50% para los hombres. Entonces, a partir del 2008, las listas han sido conformadas paritaria y alternadamente; sin embargo no se puede asegurar una representación paritaria efectiva, pues esto depende del voto de los electores.

Tabla III
Representación de hombres y mujeres en el Legislativo: 1998 – 2017

PERÍODO LEGISLATIVO	TOTAL DE LEGISLADORES	MUJERES	%	HOMBRES	%
1998 – 2003	130	16	12,30%	114	87,70%
2003 – 2007	180	39	21,66%	141	78,34%
2007 – 2011	99	27	27,27%	72	72,73%
Asamblea Constituyente 2007	130	45	34,62%	85	65,38%
2009 - 2013	124	40	32,25%	84	67,75%
2013 - 2017	144	56	38,20%	89	61,80%

Fuente: Consejo Nacional Electoral, 2013

Gráfico I
Porcentaje de mujeres y hombres en el Poder Legislativo: 1996 – 2009



Fuente: Legislatina, Observatorio del Poder Legislativo en América Latina de la Universidad de Salamanca

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados sin embargo, la realidad es diferente a aquella reflejada a nivel nacional en la Asamblea; lamentablemente la participación de las mujeres en los gobiernos locales en todo el país aún está muy minimizada. Las cifras hablan por sí solas, la participación local de las mujeres ecuatorianas no supera el 15%; por lo que se puede aducir que en la cotidianidad de lo local, las mujeres siguen relegadas a roles propios de la esfera privada, con poca participación en la esfera pública o peor aún en la vida política de sus comunidades o localidades. En el terreno local, la cultura patriarcal se ve reforzada, con una mermada participación y exposición pública de las mujeres.

Tabla IV
Representación de hombres y mujeres en los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 2014 – 2019

	MUJERES	% MUJERES	HOMBRES	% HOMBRES	TOTAL
PREFECTURAS	2	8.70%	21	91.30%	23
ALCALDÍAS	16	7.84%	188	92.16%	204*
JUNTAS PARROQUIALES	948	25.46%	2.776	74.54%	3.724

*Faltan los datos de Santo Domingo y Azuay, aún no están computados.
Fuente: Consejo Nacional Electoral, 2013

La realidad política en el Ecuador, para que las mujeres logren alcanzar cargos de elección popular correspondientes a Prefecturas, Alcaldías y Presidencias de Juntas Parroquiales se vislumbra sumamente complejo. Es alarmante ver que de 23 prefecturas, apenas 2 tengan a mujeres como sus titulares; o peor aún que de las 204* alcaldías del país, tan sólo 16 sean ocupadas por mujeres. Entonces, como podemos ver mediante las cifras, la representación política de las mujeres difiere abismalmente a nivel nacional y a nivel local. A pesar de que las organizaciones políticas han hecho un esfuerzo para que las listas pluripersonales cumplan con la Ley y puedan inscribir sus candidaturas, e incluso algunos partidos han tomado la decisión política de que algunas mujeres presidan las listas lo que aumenta las posibilidades de ganar; en los resultados no se refleja esta paridad, lo que está directamente vinculado con la forma de votación de las y los ciudadanos. Esto podría explicarse mediante la predominancia de una cultura política machista que se evidencia más al momento de elegir a autoridades locales. Así mismo, al ser la esfera local mucho más cercana, las y los votantes podrían preferir elegir a hombres que a mujeres de su entorno; proyectando la idea de que las mujeres debieran mantenerse en el espacio privado, mientras que los hombres están preparados para ejercer cargos públicos. En todas las sociedades se clasifica qué es 'lo

propio' de las mujeres y 'lo propio' de los hombres, y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo, con una serie de prohibiciones simbólicas (Lamas, 2007); quizás en las localidades ecuatorianas todavía 'lo propio' de las mujeres, no sea la política.

Sin duda alguna, la participación política de las mujeres en el Ecuador ha avanzado significativamente, pero es importante reconocer que aún queda un largo camino por recorrer. A pesar de la normativa vigente en el país obliga que se presenten listas paritarias y alternadas, así como diversas iniciativas que impulsan la participación política de la mujer; en efecto, dicha participación, especialmente en los gobiernos locales en todo el país aún se ve sumamente menguada. De igual manera, es innegable que las mujeres en los últimos años hemos asumido diversas posiciones de poder que eran tradicionalmente masculinas; sin embargo la inequidad persiste en diversos campos, como el laboral, en los espacios de toma de decisión e incluso en la incursión en la política. Por lo que tengo varias interrogantes: ¿son suficientes las acciones afirmativas o las leyes de cuotas? ¿O también es necesario pensar en acciones afirmativas de llegada, como cuotas o escaños obligatorios para mujeres, para asegurar la representación política de las mujeres tanto a nivel nacional como local? La participación política de las mujeres es un gran reto para la sociedad ecuatoriana, ahora somos actoras visibles, pero para permitir que estos cambios avancen, debemos continuar actuando con transparencia, justicia, equidad e inclusión de todos y todas.

Arboleda, María. Mujeres hacia la paridad: cambios moleculares y resistencias al cambio. En Revista La Tendencia N°9, Flacso Andes, 2009

Fraser, Nancy. Iustitia interrupta, Universidad de los Andes: Bogotá, 1997.

Htun, Mala. Democracia e inclusión política: La región andina en perspectiva comparada. En Nadando contra la corriente: Mujeres y cuotas políticas en los países andinos, Magdalena León (Editora), 2005: 15 – 39

IFAD, International Fund for Agricultural Development. Gender equality and women's empowerment. 2012, en línea: http://www.ifad.org/gender/index_full.htm. Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2013.

Lamas, Marta. Ciudadanía, Feminismo y Paridad. En PNUD América Latina Genera. 2013, en línea: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=6 18. Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2013.

León, Magdalena y Jimena Holguín. La cuota sola no basta: El caso de Colombia. En Nadando contra la corriente: Mujeres y cuotas políticas en los países andinos, Magdalena León (Editora), 2005: 41 – 89

Marisol Cárdenas Oñate, Mujeres en la historia del Ecuador, género y cultura, Ecuador 2007

Mena, Cecilia. Aproximación al cruce entre la cultura y el género. Una mirada desde los derechos de las mujeres. En Mujeres en la historia del Ecuador, género y cultura, Ecuador, 2007.

Stanton, Elizabeth. Eighty Years and More (1815-1897); Reminiscences of Elizabeth Cady Stanton. New York City, 1898.

Wills, María Emma. ¿Inclusión sin representación? Disertación presentada para obtener el título de Ph.D. en la Universidad de Austin, Texas, 2004.